

**LA MÁQUINA ADAPTABLE  
ESTADOUNIDENSE DE  
LA INTERVENCIÓN  
EN VENEZUELA**

**por EVA GOLINGER**

## ANTECEDENTES

El 11 de abril del 2002 hubo un sangriento golpe de estado en Venezuela. Éste fue similar al derrocamiento del gobierno de Allende casi 30 años antes, en una alianza poco común, se unieron sindicatos, asociaciones empresariales y el alto mando militar con un mismo objetivo: remover al Presidente Hugo Chávez Frías de su cargo democráticamente elegido. A diferencia de la historia chilena, el golpe de estado en Venezuela fue fallido y dos días después el Presidente Chávez fue repuesto en su cargo. Los detalles que rodearon los acontecimientos de aquellos breves momentos se mantuvieron oscuros y confusos y circuló información en su mayoría falsa, sobre abusos de derechos humanos, acciones de tipo autoritario y protestas pacíficas que lograron ensombrecer los hechos verdaderos.

¿Qué fue lo que realmente pasó durante esos tres días que cambiaron la historia de Venezuela para siempre? Un golpe de estado liderado por una fuerza conjunta de sindicalistas, intereses corporativos, dueños de los medios de comunicación y el alto mando militar realmente trataron de derrocar al presidente Chávez. Los medios privados que son propiedad de una élite empresarial jugaron un papel primordial en la manipulación de la información y de noticias sobre el desarrollo de los acontecimientos, engañando a los venezolanos y a quienes seguían las noticias a nivel internacional, haciéndoles creer que el gobierno de Chávez había disparado a la manifestación de la oposición y justificando de esta manera el golpe. El presidente de Fedecámaras (cámara de comercio de Venezuela), Pedro Carmona, asumió el cargo de « presidente interino » de la nación y rápidamente disolvió todas las instituciones democráticas de Venezuela. Un grupo selecto de 395 representantes de la élite venezolana se congregó en el Palacio Presidencial y firmaron el decreto de Carmona, legitimando de esta manera su «dictadura» el 12 de abril de 2002.(1)

En los Estados Unidos la administración de Bush expresó su apoyo al gobierno de Carmona y se negó a reconocer que había ocurrido un golpe militar-empresarial. En cambio, los Estados Unidos culparon al gobierno de Chávez de generar violencia e inestabilidad y manifestaron que el Presidente Chávez había renunciado a su cargo.(2) Tras bastidores, oficiales de alto rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Caracas, como Otto Reich, Eliot Abrams y el embajador Charles Shapiro se reunieron en varias ocasiones con Pedro Carmona y otros líderes

golpistas antes, durante y después de los hechos del 11 de abril.(3) Los Estados Unidos permanecieron prácticamente solos al reconocer a Carmona como jefe de estado legítimo. La Organización de Estados Americanos, CARICOM y las naciones de la Unión Europea, a excepción de España, se pronunciaron condenando el golpe y negándose a reconocer a Carmona como presidente de Venezuela.

El 13 de abril de 2002, cuando el Presidente Chávez fue devuelto al poder gracias al levantamiento popular y al apoyo que recibiera dentro de las filas militares, los Estados Unidos se vieron forzados a retirar el apoyo incondicional que le habían dado a los líderes golpistas. Sin embargo, la testaruda administración de Bush continuó acusando a Chávez de los acontecimientos y sucesos precedentes afirmando meramente que su regreso como presidente era una "segunda oportunidad" para intentar corregir y cambiar su política y estar de buenas con los Estados Unidos, es decir, sucumbir al poder de los Estados Unidos.(4)

El presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue elegido por aproximadamente el 60% de los votos en 1998, y derrotó a los dos partidos tradicionales en Venezuela, Acción Democrática (AD) y COPEI (Partido Socialista Cristiano) por mayoría aplastante. En esa primera elección, Chávez atrajo a un amplio sector de la sociedad venezolana, principalmente porque ofrecía una alternativa ante los partidos corruptos AD y COPEI, que habían gobernado la nación durante cuarenta años y habían hundido la economía a finales del decenio de 1990. Pero la aplicación inmediata de las promesas de su campaña, incluidas la reestructuración de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y la nueva redacción de la joven Constitución venezolana, resultaron demasiado radicales y abruptas para muchos venezolanos acostumbrados a vivir gobernados por AD y COPEI, cuando las promesas eran abandonadas y se hablaba del cambio estructural pero nunca se ponía en práctica.

A pesar de la conmoción provocada en algunos sectores por la rapidez con que el gobierno de Chávez aplicaba sus medidas, más del 70% del electorado participó en la redacción y ratificación de la nueva Constitución en 1999, que autorizaría cambios radicales en la sociedad venezolana. Como resultado de los términos contenidos en la nueva Constitución, en ese año se volvieron a celebrar las elecciones presidenciales y Chávez ganó con un margen similar del 60%. Con la autoridad respaldada por la Constitución, Chávez pudo iniciar una serie de cambios estructurales dentro de PDVSA que permitirían una

distribución más equitativa de las ganancias de la compañía y que, por su parte, proporcionarían ingresos para los programas sociales destinados a reducir la pobreza y garantizar los servicios sociales para la amplia población venezolana con bajos ingresos o ninguno.

Durante el período de 1998 a 2000, Chávez enfrentó una política estadounidense relativamente indiferente hacia Venezuela. No fue hasta que George W. Bush llegó a la Casa Blanca en 2001 que las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos cambiaron para lo peor. Las políticas del gobierno de Chávez no resultaban convenientes para Bush. La idea de un gobierno al frente de una de las industrias petroleras más importantes del mundo, que se relacionaba estrecha y abiertamente con Fidel Castro, constituía una píldora difícil de tragar para un gobierno republicano que, una vez más, había apretado el lazo en torno a la economía cubana con el viejo objetivo, ya de cuarenta años, de derrocar a Fidel Castro. Además, la revitalización emprendida por Chávez en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entidad que los Estados Unidos preferirían silenciar, y sus visitas a países amigos productores de petróleo, como Libia e Iraq, provocaron la irritación de la administración de Bush, por no mencionar la atención prestada por el gobierno venezolano a las políticas encaminadas a reducir la pobreza y promover la democracia participativa, ideas rechazadas por los intransigentes economistas de mercado; y para lograr un evidente disgusto hacia el gobierno de Chávez, agréguese, además, una élite empresarial venezolana muy descontenta y pudiente, con amigos en las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos y el mundo empresarial.

A principios de 2001, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos comenzaron a formular declaraciones y afirmaciones directas que indicaban una tendencia a romper relaciones con el gobierno de Chávez. Cuando el presidente Chávez expuso su desacuerdo y enojo ante los bombardeos contra Afganistán, después del 11 de septiembre, las relaciones se deterioraron rápidamente. Chávez no se plegó ante la regla de "están con nosotros o contra nosotros" y su país era demasiado importante para dejarlo en manos de un actor tan desobediente.

## **LA INVESTIGACIÓN:**

### **UNA MISIÓN DE INDAGACIONES EN LOS ARCHIVOS DE EEUU**

Recurriendo a la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, el

periodista independiente Jeremy Bigwood y yo presentamos numerosas solicitudes ante diversos organismos y entidades del gobierno de los Estados Unidos para que se nos diera acceso a documentos relacionados con Venezuela. La Ley de Libertad de Información (FOIA) es un *corpus* de leyes estadounidenses promulgadas tras la conclusión del gobierno de Richard M. Nixon, que permite a los periodistas y a otros tener acceso y desclasificar documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos. La información solicitada en virtud de la FOIA es analizada primero por el organismo oficial que posee la documentación pertinente y, después, publicada o retenida en su totalidad o una combinación de ambas.

Hay muchas entidades diferentes dentro del gobierno de los Estados Unidos. Para poder descubrir cuán profundamente involucrado estaba este gobierno en Venezuela era necesario presentar cientos de solicitudes ante organismos que incluían desde el Departamento de Estado hasta el Departamento de Defensa, el Ejército, la Agencia Central de Inteligencia, el Comando Sur de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura, la Fundación Nacional para la Democracia, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, y otras.

La investigación comenzó en 2003 y continúa en la actualidad. Con toda probabilidad, ésta se prolongará durante los próximos decenios. En general, el gobierno de los Estados Unidos demora mucho en responder a las solicitudes de la FOIA y, de forma típica, recurre a tácticas dilatorias y censuras con la intención de evitar que la información llegue al público en general. Con frecuencia, los documentos o la información retenida o demorada ilegalmente pueden someterse a un proceso de apelación, pero éstos pueden prolongarse por un período interminable y, por ende, evitar que la información crítica sea objeto del escrutinio público.

Por lo general, las investigaciones de la FOIA se realizan años o decenios después de ocurrida la intervención de los Estados Unidos, como en el caso de Chile, frecuentemente cuando ya es demasiado tarde para actuar de forma preventiva o tutelar; sin embargo, la presente investigación se está realizando en "tiempo real" y, por ende, tiene la oportunidad privilegiada de efectuar un cambio en la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Hasta la fecha, los resultados de la investigación ya han repercutido en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela y, además, han abierto los ojos a millones de venezolanos que no eran conscientes de la magnitud de la injerencia de

los Estados Unidos en su nación. A continuación, se exponen los detalles sobre lo que la investigación ha des-cubierto hasta la fecha.

No obstante, debo presentar un des-cargo de responsabilidad ya que la investigación aún no ha concluído. Por lo oportuno y relevante de la información, creo que resulta esencial llevar a cabo un análisis inmediato y poner los documentos a disposición del público, pero debe quedar clara que, mientras más documentos se adquieran, más hechos se revelarán sobre el desempeño de los Estados Unidos en los acontecimientos ocurridos en los últimos años en Venezuela y eso podría alterar la comprensión real de la investigación actual. Asimismo, muchos de los documentos han sido censurados ampliamente y, en los casos pertinentes, han sido presentadas apelaciones. El proceso de apela-ción dilatará la publicación de la información por un perío-do más prolongado e impredecible. Por lo tanto, me abstengo de sacar conclusiones, por ahora, sobre el grado de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela.

## **LA INTERVENCIÓN**

La intervencion actual de los Estados Unidos en Venezuela se ha efectuado en tres etapas, cada una de éstas adaptada a las circunstancias presentadas ante el fracaso de intentos anterio-res. La estrategia de los Estados Unidos en Venezuela ha se-guida el manual de las intervenciones en América Latina. Las tácticas utilizadas en Venezuela parecen ser una versión metamorfoseada de las aplicadas previamente en Chile (déca-da de 1970), Nicaragua (década de 1980) y Haití (década de 1990), que culminaron con el derrocamiento de presidentes elegidos democráticamente, bien mediante golpes de Estado (Chile y Haití) o su remoción como consecuencia de procesos electorales manipulados fuertemente (Nicaragua).

## **UNA OBSERVACIÓN BREVE SOBRE EL PARALELISMO CON CHILE**

Durante estos últimos años Venezuela ha compartido una historia común con el Chile de finales de la década de los 60 y principio de los 70. Las circunstancias del golpe de Estado y de las huelgas que plagaron a Chile también han sitiado a Venezuela y, sin embargo, esta última pudo resistir y vencer los intentos del movimiento de oposición de la derecha financiada y respal-dada políticamente por el gobierno de los Estados

Unidos. El primero, desafortunadamente, se vio obligado a sucumbir ante el derrocamiento violento que desencadenó el asesinato de un presidente elegido democráticamente que contaba con el apoyo del pueblo, Salvador Allende, y la instalación de una de las dictaduras más brutales en la historia de América Latina. Las manos ensangrentadas del gobierno de los Estados Unidos dejaron sus huellas en todo el golpe de Estado de 1973 en Chile y, posteriormente, los documentos desclasificados obtenidos en los Archivos de Seguridad Nacional revelaron los intrincados complotos ideados por Henry Kissinger y su cohorte para aplastar el crecimiento del socialismo en la región.

En Chile, los Estados Unidos utilizaron una táctica que, posteriormente, resultó ser muy exitosa. Antes del golpe, habían logrado canalizar cientos de miles de dólares para los sindicatos, asociaciones empresariales y organizaciones sociales dispuestas a unirse contra Allende. Los Estados Unidos intentaron evitar la elección de Allende en 1970 al fortalecer y apoyar a los partidos y candidatos de la oposición, pero la popularidad abrumadora del líder socialista no dejó otra alternativa al gobierno de los Estados Unidos que la de recurrir a la violencia. Aún así, después de la elección de Allende, los Estados Unidos instigaron actos de sabotaje económico mediante huelgas masivas dirigidas por sus contrapartes financiadas e intentaron aislar al gobierno de Allende de la comunidad internacional. Asimismo, aplicaron una estrategia, conocida posteriormente como "chilenización", que implicaba la organización de las fuerzas internas de la derecha para desestabilizar al gobierno electo. Este concepto garantizó que, mientras las fuerzas de la oposición incitaban a la confrontación violenta con el gobierno, surgirían escándalos y reacciones internacionales contra las "medidas enérgicas de Allende", la nación se vería arrastrada al desorden civil y la inestabilidad, y el gobierno sería considerado como "violador de los derechos humanos" o paria internacional. No fue hasta que todos estos esfuerzos fracasaran, tres años después, cuando decidieron poner en práctica el plan del golpe.

Las tácticas usadas en Chile fueron conservadas para ser utilizadas en el futuro por el gobierno de los Estados Unidos. El bochorno de algunos miembros del Congreso ante el desempeño de los Estados Unidos en el derrocamiento de un presidente elegido democráticamente y su apoyo incondicional a un dictador brutal que cometió atrocidades contra los derechos humanos por más de un decenio sólo afectó el tono de intervenciones futuras, no su esencia. En Venezuela, los Estados Unidos

aplicaron muchas de las mismas tácticas que habían utilizado en Chile -la forma-ción de un movimiento que agrupara a sindicatos, asocia-ciones empresariales, partidos políticos y organizaciones sociales, el sabotaje económico y las huelgas, y, por supues-to, el golpe sangriento. Pero el fracaso de esta estrategia en Venezuela llevó al gobierno de los Estados Unidos a modi-ficar sus tácticas, a combinar estrategias que habían aplica-do exitosamente en otras naciones latinoamericanas y a modernizar su metodología.

Parece sorprendente que en el año 2002, el gobierno estadounidense incitara un golpe de estado para sacar a un líder democráticamente electo. Pero basta con mirar y darse cuenta quiénes conformaban la administración estadounidense y específicamente quiénes supervisaban las políticas para América Latina, para entender este hecho. Muchas se estas mismas personas estuvieron presentes en el golpe de estado en Chile o más tarde en el conflicto armado y la intervención a Nicaragua y otras naciones de Centroamérica y el Caribe. Son ellos mismos los que hoy en día están diseñando y poniendo en práctica las políticas en la administración de Bush, tales como Otto Reich, Charles Shapiro, William Brownfield, Luigi Einaudi, John Negroponte, Elliot Abrams, entre otros. Todos ellos han hecho de las suyas en América Latina en la década de los 70 y 80. Evidentemente, estos señores no han aprendido ninguna lección. Aún después del golpe fallido de 2002 en Venezuela, el gobierno estadounidense inicitó el golpe de estado que derrocaría exitosamente al presidente electo de Haití, Jean Bertrand Aristide, a principios de 2004.

La estrategia de intervención estadounidense en Venezuela se ha adaptado a las circunstancias. Se levantó rápidamente después de haber fallado con su modelo de intevención chileno en Venezuela y cambió hacia tácticas más modernas.

## **EL MODELO NICARAGÜENSE**

Durante el decenio de 1980, el gobierno de los Estados Uni-dos estuvo profundamente involucrado en Nicaragua. Más de mil millones de dólares(5) fueron invertidos en el país para eliminar a los sandinistas del poder, primero mediante la lucha armada y, después, mediante la intervención electoral. La Fundación Nacional para la Democracia, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y la Agencia Central de

Inteligencia compartieron el terreno en esa pequeña nación centroamericana y aplicaron una serie de metodologías que habían tenido éxito en intervenciones anteriores en Chile, Filipinas y Panamá, por sólo nombrar algunas.

A finales del decenio de 1970, los Estados Unidos lanzaron una guerra sucia en Nicaragua contra el gobierno sandinista y decidieron convertir a esa minúscula nación en la "prueba de fuego" de sus nuevas operaciones estratégicas. El gobierno de Ronald Reagan creó a los *contras*, una fuerza contrarrevolucionaria compuesta por quince mil efectivos fuertemente armados que cometió atrocidades y aterrorizó a los ciudadanos nicaragüenses a instancias del gobierno de los Estados Unidos. Al alegar el temor de que el "comunismo" se "propagaría por toda la región", el gobierno de Reagan justificó la generalización de los abusos a los derechos humanos y las atrocidades cometidas por los contrarrevolucionarios entrenados por la CIA. Sin embargo, tras varios años de combates armados que culminaron con el fortalecimiento -no el debilitamiento del gobierno sandinista, el gobierno de los Estados Unidos se deses-peró tanto que tuvo que vender ilegalmente armas a Irán para poder apoyar su conflicto de mil millones de dólares en Nicaragua. Al percatarse de su propio fracaso en Nicaragua, los funcionarios del gobierno de Reagan propusieron un cambio en la política estadounidense, un paso hacia la solución "democrática" en lugar de un conflicto armado.

Concluido el decenio de 1970, el Congreso de los Estados Unidos dudaba en financiar operaciones encubiertas en América Latina después de las crudas revelaciones sobre el desempeño de los Estados Unidos en el derrocamiento de Allende en Chile dadas a conocer mediante una investigación llevada a cabo por el Congreso. (6) El propio Congreso había impuesto restricciones sustanciales al financiamiento de la CIA y al apoyo a grupos y organizaciones privadas en otras naciones, lo que obstaculizó la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para establecer redes encubiertas que apoyaran los intereses estadounidenses en el exterior. El escándalo Irán-Contras dificultó aún más el financiamiento de estas grupos y se evidenció que era menester adoptar un nuevo enfoque.

**LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA DEMOCRACIA (THE NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY)**

A finales del decenio de 1970, se creó la Fundación Política de los Estados Unidos (APF), una coalición de líderes sindicales, empresariales, políticos y académicos con el objetivo de buscar nuevos métodos para lograr los objetivos de la política exterior estadounidense en el exterior a pesar de las restricciones del Congreso. La APF, financiada por el Congreso y compuesta por un comité asesor ultraconservador como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto Empresarial de los Estados Unidos junto con representantes del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la USIA, la oficina de propaganda del gobierno de los Estados Unidos, propuso la creación de una institución financiada por el Congreso para ofrecer apoyo financiero y político a grupos y organizaciones que defendían los intereses de los Estados Unidos en el extranjero. La institución centraría su atención en la "promoción de la democracia" en el exterior mediante el apoyo financiero destinado a fomentar la "infraestructura de la democracia" que permitiría que la prensa libre, los sindicatos, los partidos políticos, las universidades y las organizaciones sociales funcionaran según los intereses de la política exterior estadounidense.

En 1983, como resultado de las recomendaciones de la APF, se creó la Fundación Nacional para la Democracia (NED) mediante legislación del Congreso, la "Ley del Fondo Nacional para la Democracia" (P.L. 98-164), y se autorizó el financiamiento por parte del Congreso para garantizar su éxito. Cuando la creación de la NED, la APF también había recomendado la formación de "institutos claves" para canalizar los fondos del Congreso hasta los partidos políticos y grupos de la resistencia en otras naciones. Estos incluían al Centro de Empresas Privadas Internacionales (CIPE), el Instituto Democrático Nacional (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto de Sindicatos Libres, supervisado por la AFL-CIO y denominado posteriormente Centro de Solidaridad Laboral Internacional de los Estados Unidos (ACILS), y estaban conectados mediante una junta directiva de enlace que compartía influencias dentro de la NED y del Congreso de los Estados Unidos. (7)

La NED fue creada como conducto perfecto para canalizar los fondos del gobierno de los Estados Unidos destinados a ofrecer la ayuda política internacional que respaldaría sus intereses en el extranjero e influiría en la política exterior y nacional de las naciones de importancia estratégica. Creada durante la Guerra Fría, los objetivos de la NED reflejaban una agenda neoconservadora que concedía prioridad a su lucha global contra el comunismo por encima de los conceptos democráticos de

soberanía y libre determinación. Por lo tanto, el *debut* de la NED en Nicaragua proporcionó la dosis principal a la intervención de los Estados Unidos en los asuntos políticos y las decisiones electorales y, en el transcurso de casi un decenio, su técnica se perfeccionó.

En Nicaragua, la CIA había sido originalmente el conducto principal para financiar al movimiento antisandinista (los *contras*), pero al ser incapaz de derrocar a los sandinistas durante las elecciones de 1984, se recurrió a la NED para garantizar el éxito en las elecciones de 1989-1990. En realidad, durante el proceso electoral de 1984, los Estados Unidos estaban tan seguros de la derrota de los sandinistas, que abogaron ampliamente por la abstención en las elecciones entre los opositores, con miras a desacreditarlas lo que, a pesar del poder y la influencia de la nación nortea, fracasó. En la segunda ocasión, los Estados Unidos decidieron asumir un desempeño mucho más activo en el proceso electoral. Mediante la creación y conformación de un movimiento opositor compuesto por organizaciones sociales, partidos políticos y afiliados a la NED, el gobierno de los Estados Unidos logró controlar los resultados de las elecciones nicaragüenses. Los Estados Unidos presionaron para lograr la unificación de diversos partidos políticos y organizaciones sociales que se oponían a los sandinistas, muchos de los cuales eran de la extrema derecha y compartían su agenda conservadora con el gobierno Reagan-Bush. Por conducto de la NED, los Estados Unidos condicionaron la financiación de estas organizaciones a la formación de un grupo unificado, la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), capaz de ganar las elecciones de 1989-1990. La CDN estaba compuesta por cuatro partidos políticos conservadores, dos agrupaciones sindicales afiliadas a la AFL-CIO, y una organización empresarial privada, COSEP, que tenía vínculos estrechos con corporaciones y figuras estadounidenses influyentes dentro de la comunidad empresarial. Ya próximas las elecciones, la NED chantajeó a los catorce partidos de la oposición en Nicaragua para crear uno sólo, la Unión Nacional Opositora (UNO), que refrendaría al candidato para la presidencia seleccionado por los Estados Unidos, Violeta Chamorro.

Los Estados Unidos no podían permitirse el lujo de fracasar nuevamente en Nicaragua frente a los sandinistas y, esta vez, el esfuerzo se dirigió a una intervención electoral con todas las de la ley y sin "ningún tipo de restricciones" a fin de garantizar que el candidato seleccionado por los Estados Unidos asumiera la presidencia. La CIA había estado financiando al periódico principal de Nicaragua, *La Prensa*, durante la guerra entre

sandinistas y *contras*, y entregó la batuta, en gran parte, a la NED y a sus afiliados internacionales a finales del decenio de 1980. El control de los medios masivos de comunicación constituyó el instrumento principal en la guerra propagandística cuya intención era no sólo captar seguidores dentro de Nicaragua, sino también filtrar noticias e información a la prensa internacional con un contenido antisandinista y pro estadounidense. El gobierno de Venezuela, encabezado entonces por Carlos Andrés Pérez (en su segundo mandato), tuvo un desempeño esencial en la canalización de fondos y apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la CDN, a la UNO y a *La Prensa*.

Carlos Andrés Pérez había desarrollado vínculos estrechos con la familia Chamorro mientras se encontraba exiliado en Costa Rica durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela; además, se había relacionado con otros nicaragüenses influyentes durante su primer mandato presidencial de 1976 a 1980. Carlos Andrés Pérez ansiaba ofrecer el apoyo de Venezuela a los esfuerzos de los Estados Unidos para derrocar al gobierno sandinista mediante el fortalecimiento de una oposición civil. A principios de 1989, la CIA destinaba de modo encubierto un mínimo de 200 mil dólares mensuales a *La Prensa* y al financiamiento de los materiales de la campaña para la UNO, que llegaban a esos destinatarios a través de fundaciones privadas venezolanas. Carlos Andrés Pérez mantuvo contactos estrechos con el presidente Bush (padre) durante el proceso electoral en Nicaragua e, incluso, nombró a su secretaria de la Presidencia, Beatriz Rángel, como representante personal en sus contactos con Bush. Según una fuente, Rángel pudo ser observada mientras llevaba una maleta "cargada de fondos secretos de Washington y Miami para Caracas" destinados a la campaña de la oposición nicaragüense.

**(8)**

El sindicato mayor de Venezuela, la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV) trabajó en conexión con la NED y la AFL-CIO para establecer vínculos con los trabajadores y sindicatos en Nicaragua, con el objetivo de incorporarlos al movimiento de la oposición. **(9)** Carlos Andrés Pérez también recomendó el uso de la firma encuestadora de los Estados Unidos, *Penn and Schoen Associates*, para llevar a cabo un programa de escrutinio en Nicaragua como parte de la agenda de intervención en las elecciones. *Penn and Schoen* había realizado el programa de escrutinio durante la campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez junto con la firma venezolana DOXA y también había sido utilizada exitosamente

como parte de la inter-vención de los Estados Unidos en las elecciones en Panamá. Posteriormente, *Penn and Schoen* devino la firma encuestadora preferida para estos tipos de intervenciones y, desde entonces, ha sido utilizada en la antigua Yugoslavia durante las elecciones que removieron a Slobodan Milosevic del poder y, más recientemente, en Venezuela, durante el referendo revocatorio contra el presidente Chávez el 15 de agosto de 2004. De hecho, en Venezuela, *Penn and Schoen* fue criticada internacionalmente por reivindicar resultados electorales fraudulentos junto a *Súmate*, el destinatario venezolano de los fondos de la NED, con la intención de desacreditar los resultados oficiales del referendo.

La conexión de Venezuela con la intervención de la CIA y la NED en Nicaragua a finales del decenio de 1980 evidencia los lazos fuertes que se crearon entre esas entidades y los políticos implicados en las acciones de ese período. Evidentemente, tales relaciones forman parte de las recientes intervenciones del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela durante la era de Chávez. Carlos Andrés Pérez, especialmente, ha tenido un desempeño notable en las tres intervenciones de los Estados Unidos en Venezuela y ha servido como enlace entre los funcionarios de la vieja escuela y otros individuos influyentes en los Estados Unidos, así como facilitador de fondos para aquellos que dirigieron el golpe contra Chávez. Fue, también, uno de los más activos y duros propagandistas internacionales contra el gobierno de Chávez.

En Nicaragua, los Estados Unidos utilizaron diversos instrumentos y metodologías para expulsar a los sandinistas del poder. Primero se explotó el conflicto armado, después se orquestó habilidosamente un plan de intervención electoral que incluyó la creación de un movimiento efectivo de la oposición, la selección y el modelado de un candidato de la oposición, la unificación de diversos partidos opositores, la compra de los medios masivos de comunicación para ganar la guerra propagandística, **(10)** el financiamiento de la campaña electoral de la oposición y el uso de redes internacionales para canalizar de forma encubierta los fondos adicionales destinados a la oposición y a los medios masivos de comunicación en Nicaragua, y garantizar el apoyo regional para el candidato seleccionado por los Estados Unidos. Asimismo, el plan de intervención incluyó el uso de firmas encuestadoras estadounidenses seleccionadas para influir en la opinión nacional durante el proceso electoral y la creación de una entidad nicaragüense no lucrativa y "neutral" dedicada a la "educación electoral" durante la

campaña.

Vía Cívica, como se la denominara, fue creada a instancias de la NED como una especie de conducto de fondos para financiar directamente el proceso electoral. Como la ley nicaragüense prohibía el financiamiento directo a partidos políticos y campañas, al igual que la ley estadounidense, la NED tuvo que buscar vías alternativas para canalizar sus fondos. Los "institutos principales" de la NED fueron utilizados para financiar a los partidos opositores, al igual que las vías ofrecidas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, pero la creación de Vía Cívica ofreció un canal abierto y directo. Cuando a finales de 1989 se aproximaban las elecciones, el gobierno de los Estados Unidos le tendió una trampa al gobierno nicaragüense, que permitiría financiar la campaña de la oposición en el orden de los 9 millones de dólares, a pesar de las prohibiciones estipuladas por la ley. **(11)** Vía Cívica, supuestamente una organización "no partidista de la sociedad civil", también fue utilizada para influir en el proceso electoral en favor de la oposición al preparar y distribuir material electoral, y celebrar talleres y conferencias de "educación electoral" que mostraban fehacientemente la parcialidad hacia la oposición.

La intervención e inversión principal de los Estados Unidos en Nicaragua alcanzó la victoria. En 1990, Violeta Chamorro fue declarada ganadora de las elecciones y los sandinistas fueron eliminados oficialmente del poder. Como resultado de las redes construidas por los Estados Unidos para encubrir su función injerencista, las elecciones se consideraron sin el menor reparo como "transparentes y democráticas" y fueron aceptadas internacionalmente. Los Estados Unidos, complacidos por los resultados de sus esfuerzos, procedieron a ampliar y a poner en práctica este nuevo modelo de "intervención democrática" en otras naciones.

## **LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL**

Desde años anteriores a la intervención en las elecciones de Nicaragua, otra entidad norteamericana canalizaba el financiamiento de los proyectos injerencistas de los Estados Unidos en el exterior. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), una organización internacional creada oficialmente en 1961 por el Congreso de los Estados Unidos, tenía originalmente como objetivo el desarrollo de la ayuda humanitaria en el mundo. Similar a la NED, la USAID desviaba una gran

parte de sus fondos para apoyar a los movimientos políticos en el extranjero que se ajustaban a los intereses de los Estados Unidos. Si bien la USAID se crea para separar la ayuda militar de la humanitaria y para el desarrollo, ésta se convirtió, simplemente, en un fondo adicional que la CIA utilizaba para sus intervenciones encubiertas. La USAID nació supervisada y dirigida por el Departamento de Estado, institución cuyas autoridades no conciben el fracaso de sus acciones.

## **UNA OBSERVACIÓN SOBRE USAID**

Uno de los primeros documentos que se conoce acerca de los usos indebidos de los fondos de la USAID fue divulgado al inicio del decenio de 1960 en Brasil. La CIA participaba entonces activamente en los intentos por impedir que João Goulart alcanzara la presidencia en ese país, ya que era considerado un "pro izquierdista" y apoyaba las "reformas sociales y económicas" que, a juicio de la CIA, llevaban el sello del "comunismo" por todas partes. La CIA y la USAID utilizaron aproximadamente 20 millones de dólares para apoyar a cientos de candidatos anti-Goulart durante las elecciones gubernamentales de 1962. La USAID fue utilizada como fachada para invertir fuertemente en el movimiento sindical brasileño. Los fondos se filtraron a través de la rama internacional de la AFL-CIO, el entonces Instituto Estadounidense para el Desarrollo Laboral Libre (AIFLD), conocido actualmente como Centro de Solidaridad Laboral Internacional de los Estados Unidos (ACILS), y controlados en el terreno por la CIA. En 1964, el presidente Goulart fue derrocado por un golpe respaldado por la CIA que culminó con una dictadura brutal patrocinada por los Estados Unidos y que duró aproximadamente 20 años. **(12)**

En la década de 1980, como parte de la adopción de modelos "de intervención democrática", el Departamento de Estado creó la Oficina de Iniciativas Democráticas de la USAID, con miras a respaldar y "fortalecer las instituciones democráticas". De 1984 a 1987, la USAID utilizó a esta oficina para filtrar más de 25 millones de dólares en los procesos electorales de América Latina. Si bien la NED asumió posteriormente funciones similares, la USAID, ha seguido utilizando este Departamento, ahora conocido como Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI), para intervenir en naciones sacudidas por "crisis que amenazan la democracia". La USAID y la NED también coinciden en las iniciativas de financiamiento para el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Demócrata Nacional, ambos institutos claves de la NED. Una gran

parte de los fondos de la USAID y la NED se canaliza hacia esfuerzos de intervención electo-ral.

## **VENEZUELA**

En el caso de Venezuela, tanto la NED como la USAID han jugado un papel fundamental en la crisis política que está en curso. De hecho, la agitación política de Venezuela ha sido creada en gran parte por el trabajo de estos organismos y sus supervisores. Tal como ocurrió en Chile, Nicaragua, Haití, Panamá y Filipinas, entre otras naciones, los Estados Unidos se han dado a la tarea de influir sobre el futuro de la sociedad y política venezolana. En Venezuela, los Estados Unidos han aplicado su exitoso modelo de "intervención democrática", lo cual ha implicado financiamiento a grupos de la oposición y partidos políticos, así como el entrenamiento político esencial que les permita lograr con éxito sus objetivos. Sin embargo, a pesar de que los Estados Unidos se han adaptado a las nuevas realidades de Venezuela y a un pueblo inesperadamente fuerte que apoya a su gobierno, su línea de ataque ha sido prevenida cada vez ha sido lanzada. Hasta ahora, las tres etapas de la intervención: el golpe, el paro y el referendo han sido infructuosas, pero las tácticas y metodologías que ha utilizado la administración de Chávez han evolucionado y se han adaptado cada vez a un nuevo escenario. No cabe la menor duda de que la cuarta intervención ocurrirá antes del 2006 cuando termina el mandato del Presidente Chávez.

En cada etapa por separado, una metodología similar que incluye varias estrategias clave y probadas han sido diseñadas con el propósito de justificar el resultado final: sacar a Chávez del poder. Estas tácticas, las cuales han sido previamente utilizadas en Chile y Nicaragua incluyen, por ejemplo:

- Aislar a Chávez de la comunidad internacional.
- Generar tensiones entre el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil.
- Aprovecharse de los problemas que enfrentaba la nación para culpar al gobierno de Chávez.
- Nutrir a los grupos de oposición a Chávez para crear un movimiento sólido anti-chavista.

- Conducir una campaña mediática para desacreditar la imagen de Chávez y darle poder a la oposición. **(13)**
- Imponer una psicosis de guerra en la mayoría de la población a través de la sobre-utilización de los escenarios de conflicto en los medios de comunicación. **(14)**
- Culpar al gobierno de Chávez de abuso de derechos humanos y denunciar tales abusos ante la comunidad internacional sin evidencia real para respaldar las acusaciones realizadas. **(15)**
- Intentar relacionar al gobierno de Chávez con apoyo a grupos y redes terroristas. **(16)**
- Desacreditar y destruir la imagen del Presidente Chávez.
- Amenazar a la administración de Chávez con un trato potencialmente "hostil" por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Todas las tácticas anteriores han sido usadas por el gobierno de los Estados Unidos en intervenciones hechas anteriormente en América Latina y en el mundo entero. En Chile, como se explicó anteriormente, un movimiento de oposición que congregó aliados poco comunes de índole sindical, empresarial y militar estuvo financiado y apoyado durante años antes del derrocamiento de Allende. Nicaragua vivió una larga década de un conflicto impuesto por los Estados Unidos que intentó crear una imagen "paria" de los sandinistas. Los Estados Unidos financiaron una guerra para remover a los sandinistas del poder y construir un movimiento de oposición unificado. A través del financiamiento con cientos de millones de dólares y un apoyo político ilimitado, el gobierno de Estados Unidos pudo lograr su objetivo a través de unas elecciones.

## **LAS TRES ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN**

### **1. EL GOLPE**

Meses antes del golpe del 11 de abril de 2002, el gobierno de los Estados Unidos había puesto en marcha un plan concebido habilidosamente para ayudar al movimiento contra Chávez. Una oposición a éste, muy flexible, se había creado entre aliados insólitos que inclufan al sindicato más grande de Venezuela, la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), la Cámara de Comercio, Fedecámaras, y a líderes de los partidos

políticos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, Movimiento al Socialismo y otros, así como a nuevos parti-dos como Primero Justicia y Proyecto Venezuela. A pesar de sus diferencias, estas entidades compartían el desacuerdo co-mún con las políticas del gobierno de Chávez. Esta oposición, incluida la CTV, estaba compuesta principalmente por individuos y organizaciones provenientes de la élite o, como comun-mente eran conocidos en Venezuela, la "oligarquía".

Si bien la tensión y la animosidad bullían entre las élites venezolanas poco después de que el presidente Hugo Chávez ganara su segundo mandato en virtud de la recién ratificada Constitución en 1999, no fue hasta 2001 en que la coalición de la oposición comenzó a consolidarse y a hacerse escuchar. La historia muestra que ésta no fue la primera vez que se creó esta alianza entre la CTV, Fedecómaras y los partidos políti-cos tradicionales. A finales del decenio de 1980, durante la co-laboración generosa de Carlos Andrés Pérez con el gobierno de los Estados Unidos, estas mismas entidades se unieron para formar la Fundación Democrática Nacional, utilizada para canali-zar los fondos de la NED desde los Estados Unidos hasta Nica-ragua. De manera que, una vez más, los sindicatos, las empre-sas y los partidos políticos se unieron para promover los intere-ses de los Estados Unidos en América Latina.

La NED había estado presente en Venezuela, aunque en menor escala, desde finales de la década de 1980, cuando comenzó a financiar a la CTV, pero, de 2000 a 2001, el presu-puesto de la NED en Venezuela se cuadruplicó y los fondos comenzaron a fluir hacia las organizaciones grandes y pequeñas que compartían una característica común: una aversión pública hacia el presidente Chávez. De los más de 877 mil dólares que la NED donó en Venezuela en 2001 para "pro-mover la democracia" , muchos de los beneficiarios del dinero incluían a organizaciones venezolanas que recibían donaciones directas de la NED sin ningún intermediario. Otras muchas organizaciones recibieron fondos por conducto de las cuatro instituciones principales de la NED, a saber, el IRI, el NDI, el CIPE y el ACILS. Algunas de las entidades financiadas direc-tamente por la NED entre 2001 y 2002 incluyeron a la Asam-blea de Educacion, la Fundación Momento de la Gente, que recibió la cuantiosa suma de 250.500 dólares, la Asociación Civil Comprensión de Venezuela y la Asociación Civil Consorcio Justicia. Durante el mismo período el International Republican Institute (Instituto Republicano Internacional) recibió 339.998 dólares para su trabajo con diversos partidos de la oposición, como Primero Justicia, AD, COPEI y Proyecto Venezuela. Igualmente, el National Democratic Institute

(Instituto Nacional Demócrata) recibió un total de 250.000 dólares para trabajar con los mismos partidos políticos. Al International Republican Institute (Instituto Republicano Internacional), adicionalmente, se le fueron otorgados más de 150.000 dólares para trabajar con la CTV en los meses anteriores al golpe.

En los años 2000, 1999, y antes, los beneficiarios principales de los fondos de la NED en Venezuela fueron el ACILS, por su trabajo con la CTV; el CIPE, por su trabajo con su contraparte, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), y el IRI para el entrenamiento y la conformación de partidos políticos. Durante esos años, los destinatarios directos de los fondos de la NED en Venezuela incluían a grupos, tales como el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), el Programa para el Desarrollo Legislativo (PRODEL), la Fundación Momento de la Gente, y Sinergia, una institución dedicada al fortalecimiento de otras organizaciones sociales aliadas con la oposición. Todas estas entidades tenían inclinaciones hacia la oposición, algunas más que otras. Aún así, el desempeño de la NED en Venezuela fue relativamente menor antes de 2001. A partir de ese año, el gobierno de George Bush autorizó un incremento en los gastos de organizaciones capaces de crear un movimiento sólido de oposición a Chávez.

La flexible coalición de la CTV, Fedecámaras, los medios masivos de comunicación privados, las organizaciones sociales financiadas por la NED y los partidos políticos de la oposición, convocó el 10 de diciembre de 2001 a la primera "huelga general", con el objetivo de oponerse a la propuesta del gobierno de Hugo Chávez de 49 leyes que pondrían en práctica muchos de los nuevos derechos representados en la Constitución de 1999. Antes de la huelga, funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, incluidos Colin Powell, George Tenet y Roger Noriega, habían hecho declaraciones que indicaban un posible rompimiento de relaciones con el gobierno de Chávez, basado en la actitud de abierta oposición de éste al bombardeo en Afganistán en octubre de 2001. La llamada a consultas a la embajadora de los Estados Unidos en Venezuela, Donna Hrinak, a principios de noviembre de 2001, fue un indicio del cambio en las relaciones. En diciembre de 2001, Charles Shapiro fue enviado oficialmente a Caracas como el nuevo embajador de los Estados Unidos en Venezuela. La trayectoria de Shapiro en el Departamento de Estado daba indicio del tono que el gobierno estadounidense había escogido para lidiar con Venezuela. Shapiro había sido asesor militar de la Embajada norteamericana en Chile, durante el golpe de Estado contra el go-

bierno de Salvador Allende y había trabajado cinco años en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador durante los convulsos años ochenta, y de 1999 a 2001, ocupó el cargo de coordinador de la oficina del Buró de Asuntos Cubanos en Washington.

La "huelga" dirigida por la oposición el 10 de diciembre paralizó a la nación durante un día y sentó las pautas para los meses venideros. La oposición organizó múltiples protestas y actos de desobediencia civil y un grupo de oficiales de alto rango del Ejército comenzó a "desertar" y a declarar públicamente un estado de rebelión. Los medios masivos de comunicación privados elevaron su tono agresivo contra el gobierno y ofrecieron abiertamente un ciento por ciento de su cobertura a la oposición, raras veces presentando avances informativos balanceados y neutrales. En marzo de 2002, la NED había otorgado una donación adicional de 300 mil dólares al Instituto Republicano Internacional para que continuara "fortaleciendo los partidos políticos" en Venezuela. En 1999 el IRI había elegido "a dedo" a Primero Justicia como su principal contrapartida en Venezuela y comenzó a moldearlo y a formarlo para transformarlo en uno de los partidos más abiertamente opuestos al gobierno de Chávez. De hecho, Primero Justicia se había formado inicialmente como una organización social sin fines de lucro y se convirtió en un partido político de derecha al mismo tiempo que el IRI comenzaba a recibir grandes fondos de la NED para fortalecer los partidos políticos en Venezuela. Aprovechando la falta de dirección y de popularidad de los partidos tradicionales en Venezuela, Primero Justicia logró ganar posiciones políticas claves que incluían escaños en la Asamblea Nacional y escaños en el consejo municipal en el propio estado y cargos claves de alcaldes municipales en los sectores más pudientes de Caracas.

Al mismo tiempo en que la NED estaba inyectando dinero a sus miembros claves de la coalición de la oposición, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas estaba dándole señales a Washington sobre la posibilidad de un cambio de gobierno y sobre el presidente de Fedecámaras (cámara de comercio de Venezuela), Pedro Carmona, como el hombre que sustituiría al presidente. En un cable enviado el 10 de diciembre de 2001 por la Embajada de los Estados Unidos en Caracas dirigido al Departamento de Estado, la CIA, la Agencia de Inteligencia para la Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional, a otras embajadas de los Estados Unidos en Bogotá, Quito, La Paz, Lima, México, Buenos Aires, Brasilia, y a la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, el embajador Shapiro se refería

a Pedro Carmona como *estadista y el hombre correcto para el momento correcto en Venezuela.*(17) EN los meses que siguieron, Carmona y su colega sindical Carlos Ortega realizaron diversos viajes a Washington por otros líderes destacados de la oposición e otros institutos de la NED. (18) A finales de febrero 2002, Fedecámaras, la CTV, partidos políticos de la oposición y organizaciones sociales convocaban a marchas masivas por las calles de Caracas.

El 10 de abril de 2002, el beneficiado Consorcio Justicia había programado una conferencia para "promover la democracia" en Venezuela, patrocinada por la NED. Uno de los oradores principales previsto era Pedro Carmona, el presidente de Fedecámaras, opositor manifiesto, conspirador del golpe y favorito de los Estados Unidos; sin embargo, la conferencia financiada con los 84 mil dólares donados por la NED a Consorcio Justicia nunca se celebró, a causa de las huelgas y protestas que se sucedían en toda Caracas ese día.(19) Con una situación que se tornaba cada vez más tensa, los canales de difusión privados transmitieron la declaración de rebelión de un general de alto rango, Néstor González González, quien hacía un llamado al presidente Chávez para que "abandonara el cargo". Dos días más tarde, en un programa televisivo en vivo, se reveló que el general González González había prefabricado y grabado esa transmisión a fin de evitar que Chávez asistiera a una Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Costa Rica, de modo que el presidente permaneciera en el país y poder activar el plan golpista. El general González González había logrado su objetivo y el 11 de abril de 2002, la CTV, Fedecámaras y los partidos de la oposición financiados por la NED organizaron una de las mayores concentraciones y marchas que se haya visto en Venezuela.

A mediodía del 11 de abril, la marcha cambió de rumbo, sin estar autorizada para ello hacia el Palacio Presidencial de Miraflores para exigir la renuncia de Chávez. No se había solicitado ningún permiso o autorización oficial para este cambio en la ruta. Frente al Palacio de Miraflores había una concentración pro Chávez y miles de "chavistas" fueron avisados de las intenciones y los movimientos de la oposición. Se movilizó la Guardia Presidencial para asegurar que los dos bandos, ahora irritados, se enfrentaran. Antes de que los participantes en la marcha de la oposición pudieran llegar al costado de Miraflores, donde se concentraban los seguidores de Chávez, se comenzó a disparar desde lo alto de los edificios que rodeaban el palacio y los primeros heridos se hallaron en la concentración pro Chávez. Inmediatamente, víctimas

inocentes de ambas concentraciones fueron alcanzadas por los disparos y antes de que pudiera aclararse lo que estaba sucediendo en el terreno, las estaciones privadas comenzaron a transmitir la declaración pregrabada de Ramírez Pérez, que culpaba a Chávez por la muertes y llamaba a la insurrección militar. Utilizando imágenes manipuladas como justificación, los oficiales militares que se habían declarado rebeldes entraron a Miraflores junto a líderes de la oposición e intentaron forzar la renuncia del Presidente Chávez.

Mientras tanto, el presidente Chávez, al negarse a renunciar, había sido detenido y encarcelado en una base militar cercana. El Palacio fue tomado por los líderes de la oposición y el Canal 8 de la televisión estatal, que había transmitido una versión bastante diferente de los acontecimientos a la de los medios de comunicación privados, fue cerrado por la fuerza. Poco después, Pedro Carmona, el líder de Fedecámaras, prestaba juramento como "presidente interino". Para sorpresa de muchos, en una primera e insólita comparecencia el 12 de abril en el Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores, emitió un decreto que disolvía todas las instituciones democráticas de Venezuela, incluidas la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Oficina del Defensor Público, el Fiscal General, la Constitución y las cuarenta y nueve leyes decretadas por Chávez en diciembre. Carmona también cambió el nombre de República Bolivariana de Venezuela por el antiguo, República de Venezuela. La lectura del "Decreto Carmona", como más tarde se ría conocido el texto, fue transmitida por los medios de comunicación privados y aprobado sin discusión por más de 395 venezolanos presentes en el Palacio. Mientras tanto, legisladores pro Chávez, como Tarek William Saab y otros seguidores, eran atacados brutalmente y detenidos por la policía de Caracas, bajo el mando del opositor y alcalde Alfredo Peña. El IRI había trabajado estrechamente con Peña durante 2001 para "diseñar su imagen" y la organización Liderazgo y Visión, financiada por la NED, había recibido una donación de 42.207 dólares para trabajar con la policía de Caracas, algunos de cuyos miembros fueron luego acusados por los homicidios de los seguidores de Chávez asesinados durante los acontecimientos del 11 de abril de 2002. **(20)**

Varios relatos indicaban que en el transcurso de los acontecimientos del 11 de abril, el cubano-venezolano Gustavo Cisneros, magnate de la multinacional de los medios de comunicación y amigo cercano de la familia Bush, recibió a Carmona, al líder de la CTV, Carlos Ortega, y a otros dirigentes de la oposición y propietarios de medios de comunicación en

la sede de sus estudios de televisión *Venevisión* para celebrar reuniones y sesiones de información durante todo el día; también hubo varias llamadas telefónicas y visitas entre Otto Reich, Elliot Abrams, el embajador Shapiro y Pedro Carmona. Todos estos contactos fueron verificados posteriormente, aunque disculpados por ser "comunicaciones normales" en tiempos de grandes riesgos.

Uno de los primeros cables del embajador Shapiro a Washington tras los intensos acontecimientos del día comenzaba así: *Escenas televisivas de alegría han marcado el regreso de los empleados de PDVSA a su sede en La Campiña... Los ejecutivos de PDVSA insisten en que la compañía debe reiniciar sus operaciones normales a principios de la próxima semana. Se prevé que los embarques se reanuden hoy. El portavoz de PDVSA declaró públicamente que no se enviará petróleo a Cuba... (21)* Evidentemente, lo que menos preocupaba al gobierno estadounidense era el trastorno violento del orden constitucional instigado por un golpe de Estado dirigido por sus asalariados. La preocupación fundamental era la garantía del flujo de petróleo hacia los Estados Unidos. Como cuarto exportador principal de petróleo en el mundo, Venezuela es asimismo el principal suministrador más cercano del crudo a los Estados Unidos. Venezuela también posee ocho refinerías de petróleo en ese país y la cadena de gas *Citgo*, que tiene concesionarias en todo el territorio. Basándose en los informes del embajador Shapiro, en donde describía escenas de júbilo en la ciudad de Caracas y el control que tenía "un estadista" como Carmona sobre este país estratégicamente importante, el vocero del presidente Bush, Ari Fleisher, anunció públicamente el apoyo del gobierno de los Estados Unidos al "Gobierno de Carmona" y su condena al "ex presidente Chávez por haber incitado a la violencia que lo obligaría a renunciar." Los Estados Unidos fueron uno de los pocos países del mundo que se apresuró a juzgar los confusos acontecimientos del 11 de abril y a reconocer y elogiar públicamente a Pedro Carmona como un presidente legítimo. Al tenerse en cuenta que los funcionarios del gobierno estadounidense habían estado preparando a Carmona durante meses para este momento, se explica el nivel de confianza que depositaron inmediatamente en él.

Los acontecimientos de las cuarenta y ocho horas siguientes alteraron drásticamente el plan golpista de la vieja escuela que había parecido tan exitoso en principio. Millones de seguidores de Chávez tomaron las calles el 13 de abril y exigían su reinstauración. Al mismo tiempo, el presidente Chávez se encontraba detenido en Turiamo, otra base militar

cerca de Maracay, donde supuestamente debía recoger-lo un avión para sacarlo del país. La Guardia Presidencial, junto con otras facciones del Ejército que se habían mantenido leales a Chávez, detuvieron rápidamente a Carmona y sus asesores, y devolvieron el Palacio a los miembros del gabinete de Chávez, quienes se dieron a la tarea de rescatar a su presidente constitucional.

La vuelta al poder de Hugo Chávez en la madrugada del 14 de abril llegó demasiado tarde para detener los titulares y los editoriales en el *New York Times*, el *Chicago Tribune* y en otros periódicos internacionales en los que se elogiaba la destitución antidemocrática del presidente venezolano, en el mismo tono con el que lo había hecho el gobierno de Bush. Los periódicos venezolanos, por el contrario, se habían vuelto sorprendentemente silenciosos. Tras múltiples expresiones de alegría y júbilo por la toma del poder por Carmona y la renuncia forzosa de Chávez, los días 13 y 14 de abril los medios de comunicación se mantenían callados e imponían un bloqueo informativo y noticioso sobre los acontecimientos que se sucedían. El siguiente cable que el embajador Shapiro envió a Washington llevaba por título "Regreso Triunfal de Chávez" y describía el decreto de Carmona como una "declaración fallida".

Mientras se iba reestableciendo la calma y la normalidad en Venezuela en los días siguientes, el gobierno norteamericano se vio obligado a admitir que Chávez era el "líder legítimo" de Venezuela; sin embargo, también advirtió que los Estados Unidos estaban "vigilándolo de cerca". Esto no detuvo en modo alguno los esfuerzos por derrocar a Chávez por otras vías. En abril de 2002, poco después del fallido golpe, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una donación de un millón en "fondos especiales para Venezuela" a la NED. El organismo procedió a distribuir estos fondos adicionales a los mismos grupos que habían tenido un desempeño clave en el golpe contra el presidente Chávez. La Asamblea de Educación, cuyo presidente, Leonardo Carvajal, había sido nombrado Ministro de Educación por Carmona, recibió una nueva donación de 57 mil dólares. La Fundación Momento de la Gente, cuya directora, Mercedes de Freitas, ha hecho todo lo posible por explicarle a la NED que jamás hubo un golpe, recibió 64 mil dólares. La Asociación Civil Liderazgo y Visión, en aquel momento dirigida por Oscar García Mendoza, quien no sólo publicó dos declaraciones de felicitación al gobierno golpista en la prensa nacional el 12 de abril, sino que además firmó un decreto de la sociedad civil que reconocía la legitimidad de Carmona como presidente, recibió 42.207 dólares. CEDICE, por conducto de CIPE, uno de los institutos

principales de la NED, recibió 116.525 dólares, a pesar del hecho de que su directora, Rocío Guijarro, fue una de las primeras en firmar y aprobar el "fallido" Decreto Carmona; y el Instituto Republicano Internacional, que había emitido una declaración de encomio en favor del golpe y de la toma de posesión de Carmona el 12 de abril, recibió 116 mil dólares para continuar su trabajo con Primera Justicia, a pesar del hecho de que varios de los líderes partidistas habían firmado el Decreto Carmona y uno de ellos, Leopoldo Martínez, había sido incluso nombrado Ministro de Finanzas bajo la presidencia de Carmona. El ACILS recibió otros 116.525 dólares para financiar a la CTV, a pesar de la participación visible del sindicato en el golpe.

El fracaso del golpe resonó desagradablemente en el gobierno de los Estados Unidos. La donación especial de un millón de dólares del Departamento de Estado para los proyectos de la NED en Venezuela evidentemente no cubriría los esfuerzos futuros hacia un cambio de régimen. Era menester contar con una nueva estrategia que pudiera adaptarse a las circunstancias peculiares de esa nación sudamericana; por lo tanto; pocos meses después del golpe, el Departamento de Estado ordenó la ubicación de una Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI) de la USAID en Venezuela.

El concepto de la OTI fue establecido por la USAID en 1994 *para dar una respuesta en países que experimentan una transición política significativa y en ocasiones rápida, que puede o no estar acompañada de crisis social y/a económica. La OTI valora, diseña y ejecuta programas que se caracterizan por ser expeditos, flexibles, innovadores, tangibles, dirigidos, catalizadores y abiertamente políticos que atacan las causas raigales de las crisis.*(22) Las OTI han sido utilizadas anteriormente en Kosovo, Haití, Indonesia, Perú, Guatemala, Filipinas y Colombia, entre otras naciones. Por lo general, la USAID orienta a sus OTI que establezcan sobre el terreno relaciones con organizaciones políticas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, y que brinden el financiamiento y el entrenamiento necesarios para obtener los resultados deseados. Las OTI suelen utilizar contratistas para apoyo adicional y administración de los fondos. Como medida de protección, el contratista crea una oficina paralela, contrata personal, establece sistemas de comunicación y selecciona y fiscaliza a los destinatarios. Según la USAID, los contratistas son *"vitales para el éxito de los programas de la OTI porque se espera que venzan los grandes*

*retos que se presentan 'en los países desgarrados por la guerra' o inestables por otras razones en los cuales operan las OTI."(23)*

En junio de 2002, la OTI creó una unidad en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. El programa estaba coordinado estrechamente con la sede diplomática estadounidense y, de hecho, el director del programa de la OTI estaba subordinado al embajador estadounidense, encargado de supervisar. Con una asignación de siete millones de dólares para el proyecto de dos años, durante sus primeros seis meses la OTI recibió un presupuesto de 2.197.066 dólares, más del doble de lo que recibió la NED para seis meses. Poco después de su creación en Venezuela, la OTI concedió a *Development Alternatives, Inc.*, una compañía consultora privada estadounidense, un contrato valorado en 10.061.062 dólares para crear y controlar un fondo y un programa de donativos de siete millones de dólares como *respuesta directa a la creciente polarización política en Venezuela.*

## **2. EL PARO**

*Development Alternatives, Inc. (DAI) se aprestó rápidamente a establecer su oficina en el elegante sector de El Rosal, en Caracas, en la misma calle de la sede del Instituto Republicano Internacional en Venezuela y a unas cuadras de éste. La DAI también comenzó a cumplir expeditamente sus obligaciones contractuales y anunció la creación de Venezuela: Iniciativa para la Construcción de Confianza (VICC). Según afirmó la DAI, su objetivo, conjuntamente con la OTI, "ayudar a los venezolanos a fomentar las condiciones políticas que impedirían los conflictos violentos y la ruptura sistémica."(24)*

Tanto la DAI como la NED decidieron financiar esos mismos grupos que participaron abiertamente, e incluso lideraron el golpe contra el Presidente Chávez unos meses antes. Uno de los primeros fondos que la DAI distribuyó en Venezuela, bajo el lanzamiento de su programa "Venezuela: Iniciativa para la Construcción de Confianza" (VICC), sirvió para financiar a muchos de los mismos grupos que habían participado abiertamente, e incluso liderado, el golpe contra Chávez hacía sólo escasos meses. Una de las primeras donaciones distribuidas por la DAI en Venezuela como parte de su programa VICC tenía el objetivo de "Promover el diálogo social y la formación de los ciudadanos" por conducto de los medios de

comunicación. El proyecto incluía la producción de comerciales en la televisión y en la radio a fin de promover "valores democráticos y modernos para romper con los patrones del paternalismo y el populismo".

(25) El proyecto garantizaba la co-laboración de Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. En abril, después del fracaso golpista, Carmona había escapado de su arresto domiciliario, abandonó el país y buscó y obtuvo asilo político en la vecina Colombia. En Venezuela dejaron a Carlos Fernández con las riendas de la asociación empresarial más poderosa de la nación y éste continuó los esfuerzos de Carmona para tratar de lograr la destitución prematura del cargo del presidente Chávez.

Fue clave el momento particular en que el proyecto de la DAI centró su atención en los comerciales de la radio y la televisión. El 2 de diciembre de 2002, Fedecámaras, la CTV y los partidos de la oposición, conocidos ahora como Coordinadora Democrática, iniciaron una "huelga general" nacional con la intención de desestabilizar la economía venezolana y obligar al presidente Chávez a renunciar. En franco apoyo a los objetivos de la oposición, los medios de comunicación privados se sumaron simbólicamente a la huelga con la suspensión de toda la programación y los comerciales habituales, y donaron el ciento por ciento del espacio de transmisiones a la oposición. La Coordinadora Democrática, con la ayuda de las firmas principales de relaciones públicas de Venezuela y la USAID, produjo los comerciales "antichavistas" de mejor factura que los venezolanos jamás habían presenciado. Dichos comerciales, a menudo transmitidos diez al mismo tiempo en los intervalos de la cobertura de marchas, discursos y entrevistas de la oposición, contenían mensajes diversos sobre los fracasos de Chávez, supuestos abusos de los derechos humanos y sobre la crisis política general y el pobre estado de la nación. Algunos de los comerciales utilizaban imágenes de niñas cantando estampando en las paredes huellas de las manos en color rojo que simbolizaban la sangre, con mensajes sobre el "futuro de la nación", la "seguridad de la infancia" y la "necesidad de crear una nueva Venezuela". El proyecto de comerciales de la radio y la televisión de la DAI en colaboración con Carlos Fernandez se inició el 9 de diciembre de 2002, sólo siete días después de que comenzaran la huelga y la propaganda de guerra.

Tras el fracaso del intento golpista en abril y la instalación de la OTI en junio, surgió la Coordinadora Democrática (CD). El momento era interesante y el nombre familiar. De orígenes muy similares a los de la Coordinadora Democrática Nicaragüense, la CD venezolana estaba compuesta

por Fedecáma-ras, la CTV, numerosas organizaciones de la sociedad civil y alrededor de diez partidos políticos diferentes, muchos de los cuales seguían siendo beneficiarios de la NED. En lugar de reflejar los incidentes ocurridos del 11 al 14 de abril, que habían paralizado a la nación y alterado el futuro de Venezuela, la CD comenzó inmediatamente a trabajar en la fase siguiente. Pese a que la Organización de Estados Americanos había enviado una delegación encabezada por el secretario general, César Gaviria, para que ayudara a "negociar" una solución, la oposición insistía en una sola forma de salir de la crisis: la destitución del presidente Hugo Chávez.

En octubre de 2002, oficiales militares contrarios al gobierno, muchos de los cuales habían tenido un desempeño clave en el golpe, declararon un estado de rebelión, reivindicaron una plaza en la acaudalada sección oriental de Caracas y la declararon "zona liberada". La CD y los medios de comunicación privados, que públicamente apoyaban la rebelión militar, utilizaron el caos creciente como plataforma para hacer un llamamiento a la "huelga nacional" a principios de diciembre. El segundo día de la huelga, el Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, sostuvo un encuentro en Bogotá con el expresidente interino golpista, Pedro Carmona, quien, según los periódicos de Colombia, se había reunido a menudo con la embajadora estadounidense en esa nación, Ann Patterson. **(26)** Si se toma en consideración que Carmona aún mantenía contactos con sus contrapartes de Fedecámaras y que la asociación empresarial era la instigadora y promotora principal de la huelga, el encuentro entre el Secretario de Estado estadounidense y un líder golpista exiliado que tenía un desempeño permanente en la desestabilización de una nación democrática, parecía fuera de lugar; sin embargo, era evidente que esa conducta era la norma en el gobierno estadounidense. De hecho, Pedro Carmona había realizado viajes frecuentes a los Estados Unidos inmediatamente después del golpe en abril de manera impune y solo cuando aumentaron las presiones internacionales, el Departamento de Estado revocó su visa de turista. **(27)**

La huelga encabezada por la CD se prolongó hasta febrero de 2003. Los daños económicos sobrepasaron los diez mil millones de dólares. La huelga, que en muchas áreas era más bien un paro patronal, ya que los propietarios de los negocios cerraron las compañías y de esta manera obligaron a los empleados a no trabajar, se había centrado en la industria petrolera, la cuerda salvavidas de Venezuela y la fuente principal de ingresos. Una facción de trabajadores de PDVSA, principalmente empleados

de la alta dirección encabezados por Juan Fernández, formó una entidad denominada Gente de Petróleo que pasó a formar parte de la CD. Los directores de alto nivel y otros trabajadores de PDVSA que se sumaron a la huelga no sólo violaron sus propios contratos, sino que hicieron imposible también que el resto de los obreros tuviera acceso a los códigos y las áreas autorizadas para hacer funcionar la refinería y poner en marcha otras operaciones de la industria. INTESA, una empresa mixta poco conocida, aunque de importancia estratégica, formada por una compañía estadounidense con vínculos con la CIA, la *Science Applications International Corporation* (SAIC) y PDVSA, tuvo un desempeño clave en la paralización de la industria petrolera venezolana.

INTESA, la empresa de Información y Tecnología formada para poner en marcha todas las operaciones electrónicas de PDVSA y actualizar muchos de los sistemas analógicos más antiguos en la nueva tecnología, no solo se sumó inmediatamente a la huelga, sino que sabotó intencionalmente el equipamiento principal y las redes necesarias para el funcionamiento de la industria. Empleados de INTESA alteraron por control remoto los códigos de acceso y la programación, lo que hizo imposible que los trabajadores que quedaban en PDVSA pudieran operar las computadoras, las máquinas y los equipos de la refinería. Como resultado, se interrumpió la producción petrolera de Venezuela y las pérdidas fueron devastadoras. No sólo se privó al venezolano común de gasolina y petróleo, sino que los contratos con socios internacionales se vieron seriamente amenazados. Venezuela tuvo que comprar petróleo en otras naciones a fin de cubrir las necesidades mínimas de sus obligaciones contractuales. Las colas para el abastecimiento de la gasolina en algunas partes de Venezuela eran de más de cinco millas de largo. Como la huelga se prolongó hasta finales de diciembre, muchos taxistas y propietarios de automóviles pasaron la Nochebuena vigilando la cola, dentro de sus autos, en espera de una ración de gasolina. Millones de ciudadanos que no tenían artefactos electrodomésticos se vieron obligados a cocinar con leña, incluso en medio de Caracas, durante los sesenta y cuatro días que duró la huelga.

SAIC, la accionista mayoritaria de INTESA, en ese momento propietaria del 60% de la compañía frente a un 40% de PDVSA, es una contratista importante del gobierno estadounidense. Su junta directiva está compuesta por antiguos jefes del Estado Mayor del Ejército, exagentes de la CIA y empleados gubernamentales de alto rango, está vinculada estrechamente a dicho gobierno y no sólo en materia de contratos. Cables enviados por la Embajada de los Estados Unidos durante las negociaciones entre PDVSA y

SAIC, relativos a la formación de INTESA, indicaban que la empresa mixta era de "importancia crucial" para la nación norteaña.

El presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, trató de resolver amistosamente la situación con INTESA durante la huelga, y le informó a la compañía que sus obligaciones contractuales le exigían continuar la prestación de los servicios a pesar de las circunstancias externas. Cuando la dirección de INTESA se negó a cumplir con PDVSA, Rodríguez solicitó que le entregaran los códigos de acceso al equipamiento para que los empleados de PDVSA pudieran trabajar la maquinaria y poner en marcha la industria. Ese intercambio duró varias semanas. INTESA siguió negándose a cooperar con PDVSA y, al final, los empleados de PDVSA tuvieron que entrar a la sede de INTESA y apoderarse del equipo para poner a funcionar la industria petrolera venezolana.

Cuando la huelga se encontraba en su punta máximo, la Casa Blanca hizo un llamamiento para la celebración de "elecciones anticipadas" en Venezuela con el objetivo de poner fin a la crisis política. El gobierno estadounidense, que nueve meses antes había respaldado el golpe, ahora apoyaba nuevamente una solución anticonstitucional en Venezuela. En la Constitución venezolana no estaba prevista la celebración de "elecciones anticipadas" en momentos de crisis política. No obstante, el 13 de diciembre de 2002, la Casa Blanca emitió una declaración que expresaba: *los Estados Unidos están convencidos de que la única vía pacífica y políticamente viable de salir de la crisis es la celebración de elecciones anticipadas.* **(28)** Ese mismo día, Richard Boucher, vocero del Departamento de Estado, hizo un comentario revelador en una reunión informativa para la prensa en la que declaró, *"... pensamos que las elecciones anticipadas son el tipo de solución que se requiere. Y supongo que podría decirse que ése es nuestro objetivo..."* **(29)** Claramente, los Estados Unidos tenían un objetivo en mente: socavar la Constitución venezolana mediante la convocatoria a elecciones inconstitucionales a fin de sacar a Chávez del cargo bajo el pretexto de un proceso electoral democrático. ¿Después de todo, quién podría negar que las elecciones eran democráticas?

Durante ese mismo período, el Departamento de Defensa estaba enviando a Washington información de inteligencia tergiversada, en un intento por presentar una imagen paria del presidente Chávez, a fin de poder justificar una vez más cualquier acción en su contra. Un cable de

diciembre de 2002 contenía afirmaciones falsas de que Chávez había *ordenado la destrucción de los canales de televisión* Globovisión, TeIeven, Canal Dos *y posiblemente otros medios de informa-ción. Esas acciones estaban programadas para la noche del 12 de diciembte.* Tales afirmaciones eran completa mente in-fundadas. El presidente Chávez nunca dió órdenes para di-chas acciones, ni jamás se destruyeron esos canales. De he-cho, esos mismos medios de televisión estaban transmitiendo las veinticuatro horas del día mensajes "antichavistas" no censurados, que en muchos casos eran de carácter violen-to y agresivo, y el Estado no había tomado ninguna medida para limitar la libertad de expresión; sin embargo, los recep-tores en Washington no sabían que la información era falsa. En el mismo informe se decía: *tropas cubanas y guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombi-a en Vene-zuela para apoyar a Chávez,* con la intención clara de vincu-lar al líder venezolano con la guerrilla colombiana y abrir así las puertas a una intervención internacional. **(30)**

Con una extraña coincidencia de fecha, lugar y hechos, se crea en Venezuela una nueva entidad. Al sacar a SAIC de PDVSA y perder ésta su dominio sobre la industria petrolera mas im-portante del hemisferio occidental, se creó *Súmate*, movimiento no lucrativo, centrado en las elecciones, de tecnología avan-zada y dirigido por venezolanos acaudalados alineados con la oposición. **(31)** *Súmate* debuta al final de la huelga que había fracasado en su objetivo de deponer a Chávez, aunque sí había logrado amargarles la vida a los venezolanos mediante la devastación económica. La oposición atendía los reclamos es-tadounidenses de celebrar "elecciones anticipadas", pero el gobierno se negó con todo su derecho a permitir tal acción inconstitucional. *Súmate* ofrecía una alternativa ante un mo-vimiento desesperado de la oposición y un gobierno estado-unidense ansioso: un referendo.

La Constitución de Venezuela de 1999 incluye una disposición en el Artículo 72 que permite solicitar un referendo revocatorio de cualquier funcionario público cuando se haya cumplido la mitad de su mandata. El referendo deberá ser solicitado par el 20 % del electorado, un número mayor de electores que los que eligieron al funcionario deberá votar por la revocación y dichos votos deberán constituir mayoría so-bre los que votan en favor de mantenerlo en el cargo. El pro-ceso era complejo. Pero, *Súmate*, impulsado por el generoso apoyo monetario que suponía la acción opositora y sin repa-rar que según el texto constitucional se necesitaba que el gobierno hubiera cumplido más de la mitad de su mandato, a

principios de febrero de 2003, inició una campaña de recogida de firmas con el objetivo de presentar una petición para un referendo.

Al afirmar haber recogido millones de firmas en apoyo a un referendo para revocar el mandato del presidente Hugo Chávez, *Súmate* exigió que el gobierno convocara a una elección de inmediato. El gobierno venezolano no aceptó estas exigencias, ya que aún no se había cumplido la mitad del mandato del Presidente, como establece la Constitución. Los Estados Unidos otorgaron a *Súmate* una recompensa generosa por sus acciones. La NED y la USAID donaron fondos a la organización para que continuara luchando por el referendo. **(32)** Los Estados Unidos presentaron a *Súmate*, al igual que hicieron con *Vía Cívica* en Nicaragua, como una entidad neutral dedicada a la educación electoral, pero en el propio sitio web de la organización se expresaba claramente que su objetivo era "promover un referendo contra el presidente Chávez". **(33)** Asimismo, la vicepresidenta y tesorera de *Súmate*, María Corina Machado, había firmado el infamante "Decreto Carmona" durante el intento golpista, lo que puso en evidencia el sesgo "antichavista" y las tendencias antidemocráticas de esta organización. Alejandro Plaz, el presidente de *Súmate*, fue director de la Oficina Andina de *McKinsey & Company*, una firma consultora con vínculos notorios con la CIA.

### **3. EL REFERENDO**

Para el año fiscal 2003, la OTI solicitó 5.074.000 dólares para sus operaciones en Venezuela. La NED entregó más de 1 millón de dólares a sus contrapartes, quienes eran mayoritariamente las mismas organizaciones que habían encabezado la huelga ilegal de sesenta y cuatro días que devastó la economía venezolana. La DAI también continuó ofreciendo donaciones a los proyectos que formaban parte de su programa VICC. Una vez fracasada la huelga, quedó clara que la oposición necesitaba consolidarse y centrarse en una solución "real", un proceso electoral que pareciera legítimo ante el mundo. La Constitución abría las puertas a la posibilidad de celebrar un referendo revocatorio y, en mayo de 2003, tras más de nueve meses de mediación de la OEA, la oposición convino en buscar una solución "pacífica y constitucional" a la crisis. Como las elecciones anticipadas eran inconstitucionales, el referendo convertiría en la única vía que permitiría remover prematadamente al presidente Hugo Chávez de su cargo.

*Súmate* encabezó inmediatamente una campaña para obligar al gobierno a aceptar las firmas que habían sido reco-gidas en febrero de 2003. Los medios de comunicación priva-dos y la prensa internacional, alentados por el gobierno de los Estados Unidos, apoyaron ese reclamo. Pese a que no se habí-a cumplido con los requisitos estipulados en el Artículo 72, voceros de dicho gobierno repetían continuamente sus afirm-aciones de que el gobierno de Chávez impedía la celebra-ción de un referendo constitucional. El Consejo Nacional Electo-ral de Venezuela (CNE), un organismo gubernamental au-tónomo, declaró que no aceptaría las firmas recogidas par tra-tarse de una clara violación de los requisitos para un referendo. El CNE formuló entonces un conjunto de normas y directri-ces que regularia el proceso del referendo. Se fijó una fecha a finales de noviembre para la campaña de la petición que se desarrollaría en apoyo al referendo revocatorio. Si se obtenía el 20% requerido de las firmas de los electores registrados, aproximadamente 2.4 millones, entonces se celebraría el proce-so para revocar el mandato del presidente Chávez.

*Súmate* inició sin dilación una campaña mediática y pro-pagandística en apoyo a la petición, conocida como el "Reafirmazo". Con los fondos de la NED y de la USAID, acometió la producción en serie de materiales "antichavistas" y en favor del referendo, que se distribuyeron por toda la na-ción. También, la organización produjo unas pequeñas tarje-tas azules que confirmaban que el elector había firmado la petición para un referendo revocatorio. Las tarjetas se distri-buyeron en las mesas de la campaña y se indicó a los electores que las entregaran a los empleadores o, de lo contrario, que-darían cesantes. En el otoño de 2003, la OTI solicitó, y se le autorizó, una suma adicional de 6.345.000 dólares para utilizarlos en Vene-zuela durante 2004. La USAID otorgó al Instituto Republicano Internacional y al Instituto Demócrata Nacional más de dos millones de dólares para "garantizar procesos electorales confiables" y "fortalecer a los partidos políticos" en Venezue-la durante 2003-2004. Los fondos del NDI mencionaban específicamente colaboraciones con *Súmate*.

Exactamente alrededor de la fecha del "Reafirmazo", en oto-ño de 2003, los Estados Unidos lanzaron otro ataque contra el gobierno de Hugo Chávez, esta vez con la afirmación de que Venezuela tenía campamentos de entrenamiento de "terroris-tas" y que colaboraba con las FARC y el ELN de Colombia, ambos grupos incluídos en la lista estadounidense de organiza-ciones terroristas internacionales. En un artículo de Linda Ro-binson,

publicado en octubre en *U.S. News and World Report* titulado "Terror Close to Home", se afirmó que los terroristas de Al Qaeda, las FARC y el ELN tenían campamentos de en-trenamiento diseminados por toda Venezuela. Las afirmaciones se basaban en los comentarios de un "funcionario anónimo estadounidense" pero nunca fueron verificados. Al mismo tiempo, el Departamento de la Defensa hacía circular una "Evaluación de Inteligencia" en donde se alegaba que Chávez había entregado a la FARC y al ELN de Colombia 1 millón de dólares y que estaba creando grupos guerrilleros armados para defender su "revolución". El informe citaba como fuentes de inteligencia a El Universal, El Nacional y el canal de televisión Globovisión de Venezuela. Todos estos medios de comunicación son devotamente antichavistas. No se citaron otras fuentes en el informe para respaldar tales afirmaciones. **(34)**

Pese a esas presiones internacionales, el proceso de recogida de firmas marchó bien. Más tarde, el CNE declaró sólo 1 millón 900 mil firmas validas, mientras que cerca de otro millón fue desestimado y cuestionado por fraude. Más de 800 mil espacios de firmas fueron llenados con la misma letra, en vio-lación a las regulaciones del CNE. La oposición reaccionó con violencia ante la noticia. En febrero de 2004, facciones extremistas recién forma-das de la Coordinadora Democrática lanzaron un plan deno-minado "La Guarimba", creado al parecer por el cubano-ve-nezolano Roberto Alonso. "La Guarimba" hacía un llamamien-to a los grupos de derecha para que se sumaran a la amplia desobediencia civil y la violencia en las calles de Caracas y otras áreas metropolitanas a fin de provocar acciones represivas por las fuerzas del Estado y justificar entonces los reclamos por vio-lación de los derechos humanos y la falta de orden institucional. "La Guarimba" duró del 27 de febrero al 1 de marzo de 2004 y, durante ese período, varios ciudadanos venezolanos resultaron lesionados y arrestados por violación de la ley. Los medios de información, controlados por la oposición, se encargaron de difundir rápidamente por el mundo una versión elaborada de los acontecimientos que señalaba al gobierno como el "represor" y presentaba a los arrestados por haber violado la ley durante ese período como a "víctimas de la tor-tura y el arresto ilegal". "La Guarimba" tenía un parecido marcado con la estrategia de "chilenización", aplicada en ese país austral y en Nicaragua. En ambos, se utilizaron tácticas similares, con resultados idénticos.

Como consecuencia de la violencia y la inestabilidad cau-sada nuevamente por la oposición, el gobierno venezolano acep-tó que fueran "comprobadas"

las firmas que parecían fraudulentas en un plazo de cuatro días, proceso que estaría bajo el control del CNE. Se le daba así a la oposición otra oportunidad para obtener legítimamente las 2.400.000 firmas necesarias para llevar a cabo el referendo revocatorio. El plazo para la comprobación de firmas, "reparo", como se le conoció, fue a finales de mayo de 2004. El Centro Carter y la OEA actuaron en calidad de observadores.

Con cerca de 100 mil nuevas firmas, la oposición obtuvo la cifra necesaria y la fecha del referendo se fijó para el 15 de agosto de 2004. Unos cinco días después de anunciarse la confirmación del referendo, la oposición lanzó un plan alternativo para un gobierno de transición en el período posterior a Chávez. Con el título de "Plan Consenso País", el proyecto surgió como el primer intento por parte de la oposición de ofrecer a los venezolanos cualquier otra cosa que fuera más allá de la estricta posición de "sacar a Chávez de la presidencia". La oposición había sido objeto de fuertes críticas internacionales por no tener planes concretos, ni candidatos viables para oponerse a Chávez, ni una plataforma para desarrollar la campaña. El Plan Consenso apareció como la solución mágica; sin embargo, las pulidas ofertas del Plan no nacieron de esfuerzos independientes de la oposición: de hecho, eran el resultado de una donación de la NED a CIPE-CEDICE en 2003, junto con fondos de la USAID que llegaron a través de la DAI a los diversos grupos de la oposición, incluidos Liderazgo y Visión, y Queremos Elegir.

Además, tanto el IRI como el NDI habían tenido su desempeño y financiado el engendro de este "programa alternativo". Era objetivo de los Estados Unidos ganar el referendo e implantar un gobierno de transición que trabajaría en función de sus intereses. La propia campaña del referendo, vía *Súmate* y la CD, y el programa alternativo, vía los donantes de la NED y la USAID, eran financiados y supervisados por agentes del gobierno estadounidense. (35) La NED escogió a CEDICE como el diseñador principal de un programa para establecer un "gobierno de transición", pese al hecho de que la presidenta de CEDICE, Rocío Guijarro, era una de las signatarias principales del Decreto Carmona, y el "presidente interino" la había escogido para que representara a las organizaciones no gubernamentales en su "ceremonia de toma de posesión". CEDICE también era uno de los grupos "antichavistas" más notorios en Venezuela cuyos líderes intentaron en varias ocasiones convencer al director del programa de la NED, Christopher Sabatini, de que no fue un golpe de Estado lo que ocurrió el 11 de abril de 2002, sino, más bien, un levantamiento popular

contra un "dictador". (36)

Pese a los millones de dólares invertidos en la oposición a Chávez (37), el 15 de agosto de 2004, más del 59% de los vene-zolanos votó por ratificar su mandato y mantenerlo en el car-go. Aunque el Centro Carter y la OEA certificaron los resul-tados oficiales del referendo del CNE, la oposición, encabeza-da por el proyecto *Súmate*, financiado por los Estados Uni-dos, alegó fraude. *Súmate* afirmó que había realizado un escrutinio final, conjuntamente con la firma estadounidense *Penn, Schoen & Berland* - utilizada antes en intervenciones electorales en Ni-caragua, Panamá y Yugoslavia- que demostraba resultados exactamente opuestos que indicaban que los votos en favor de la revocación de Chávez superaban al 59%. (38) Un escruti-nio final del partido de la derecha "antichavista" y contra par-te del IRI, Primera Justicia, también mostró el mismo resulta-do. El resto de los escrutinios finales conducidos por firmas internacionales y observadores independientes se ajustaba a los resultados oficiales del CNE; sin embargo, *Súmate* y la CD expresaron que se había cometido fraude en el cálculo de los votos y se negaron a reconocer los resultados.

## EL FUTURO

Recientemente, Miami se ha convertido en un refugio para los venezolanos autoexiliados que buscan nuevas formas de deponer al presi-dente Hugo Chávez de su cargo electo democráticamente. A principios de octubre de 2004, el autor de la "La Guarimba", Robert Alonso, apareció en Miami, después de haberse emiti-do una orden judicial para su detención en Venezuela en rela-ción con apróximadamente ochenta paramilitares colombia-nos encontrados en su granja de las afueras de Caracas en mayo de 2004, supuestamente implicados en un complot para asesinar a Chávez. El expresidente venezolano Carlos An-drés Pérez también se ha asentado en Miami en los últimos meses. Desde su casa allí, en julio de 2004, Pérez declaró al periodico El Nacional que Chávez merecía "*morir como un pe-rro*" y que "*la vía violenta permitirá sacarlo. Es la unica que tenemos*". (39)

Varios exoficiales militares que se sabe participaron en el gol-pe también aparecieron en Miami, junto con Carlos Fernández, expresidente de Fedecámaras, y Carlos Ortega, expresidente de la CTV, que había obtenido asilo político en Costa Rica, pero lo perdió posteriormente una vez que

regre-só de forma clandestina a Venezuela y apareció en la televisión en una manifestación previa al referendo. El gobierno venezolano emitió órdenes de detención contra Fernández y Ortega en 2003, por dirigir una huelga ilegal de sesenta y cua-tro días de duración que ocasionó la pérdida de miles de millones de dólares a la economía del país. El gobierno venezol-ano también tiene solicitudes de extradición pendientes con el gobierno estadounidense por dos oficiales militares, Germán Rodolfo Varela y José Antonio Colina, quienes se supone fue-ron los autores intelectuales de las bombas colocadas en las embajadas de Colombia y España en Caracas, en el otoño de 2003. Los oficiales han solicitado asilo político y tienen casos pendientes ante jueces de inmigración en Miami.

-

Igualmente, han habido informes sobre campos de entrenamiento terroristas antichavistas en Miami dirigidos por extremistas venezolanos auto-exiliados y exoficiales militares que se han unido a la conocida comunidad anticastrista de Miami. Pese a las solicitudes del gobierno venezolano para que el gobierno estadounidense investigue esos campamentos, no se ha emprendido ninguna acción.

La Oficina de Iniciatiavas para la Transición-OTI (Office of Transition Initiatives) que, en principio, según la USAID, se instaló en Venezuela como un proyecto de dos años de duración ha decidido permancer en Venezuela y ha pedido 5 millones de dólares adicionales para el 2005. La NED continúa financiando a los grupos de oposición de Venezuela con 1 millón de dólares anuales. Las próximas elecciones presidenciales están programadas para el 2006 y por lo que parece esos 6 millones de dólares serán aprovechados rápidamente.



(1) La ceremonia de "toma de posesión" fue televisada en vivo a través de todos los canales de televisión privados de Venezuela. El documento que fue firmado por los que estuvieron presentes fue olvidado en el Palacio Presidencial cuando los golpistas fueron obligados a salir. El 19 de septiembre de 2004 un fiscal del gobierno venezolano Danilo Anderson anunció que iniciaría un proceso judicial contra los 395 firmantes del documento.

(2) En la mañana del 12 de abril de 2002 el vocero de la Casa Blanca, Ari Flescher, afirmó: "Sabemos que la acción estimulada por el gobierno de Chávez provocó esta crisis. De acuerdo a las informaciones disponibles, el gobierno de Chávez reprimió las manifestaciones pacíficas. Los simpatizantes del gobierno, siguiendo las órdenes de Chávez, dispararon contra manifestantes pacíficos y desarmados, provocando la muerte a 10 personas e hiriendo a 100. El ejército y la policía de Venezuela se negaron a disparar contra los pacíficos manifestantes y a apoyar el papel del gobierno en tales violaciones de los derechos humanos. El gobierno también trató de evitar que los medios de comunicación independientes reportaran los acontecimientos. Ahora, como resultado de estos acontecimientos, el presidente Chávez ha renunciado a la presidencia. Antes de renunciar, destituyó al Vicepresidente y al Gabinete y se ha instaurado un gobierno civil de transición." <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/20020412-1.html>

(3) Cable enviado desde la Embajada de los Estados Unidos en Caracas por el embajador Charles Shapiro, obtenido por Eva Golinger y Jeremy Bigwood a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Disponible en [www.venezuelafaia.info](http://www.venezuelafaia.info)

(4) El domingo 14 de abril de 2004, en el programa "Meet the Press" (Conozca a la Prensa) en NBC Noticias, Condoleezza Rice afirmó: "Bueno, espero que Hugo Chávez entienda el mensaje que su gente le envía, de que sus propias políticas, que él ha aplicado con mano dura, no están funcionando para el pueblo de Venezuela. Espero que cumpla lo que ha dicho en su discurso de esta mañana, que entienda que este es un momento para la reflexión nacional, que reconozca que le llegó el momento de reflexionar sobre cómo Venezuela llegó a donde está. Él necesita respetar el derecho constitucional. No es el momento para hacer una cacería de brujas. Es el momento para la reconciliación nacional en Venezuela. Y estamos trabajando con nuestros socios en la OEA y en la región para tratar de ayudar a Venezuela, aunque este es un momento muy difícil. Pero esperamos que Chávez reconozca que todo el mundo está observando y que aproveche esta oportunidad para encursar su propia nave, la cual, francamente, se ha estado moviendo en la dirección contraria desde hace tiempo."

(5) George Miller, demócrata por California, declaró que la cifra era de mil millones de dólares: "Nosotros vamos a participar en este proceso electoral (invirtiendo) mil millones de dólares. Nosotros financiamos a los contras, destruimos la economía [de Nicaragua], tomamos a la señora Chamorro y sufragamos el funcionamiento de su periódico, costeamos toda su operación y ahora le vamos a garantizar las mejores elecciones que los Estados Unidos puedan financiar." Registro del Congreso (Cámara), 4 de octubre de 1989, p. H6642.

(6) Ver *The Church Commission Report*, Congreso de los Estados Unidos.

(7) Ver *National Endowment for Democracy: A Foreign Policy Branch Gone Awry*, un informe de política del Consejo de Asuntos Hemisféricos y del Centro de

Documentación Pedagógica Inter-hemisférico, 1990. En la actualidad, el senador republicano John McCain y la demócrata Madeline Albright supervisan al Instituto Republicano Internacional y al Instituto Demócrata Nacional, respectivamente.

(8) Ver William Robinson: *A Faustian Bargain: U.S. Intervention in the Nicaraguan Elections and American Foreign Policy in the Post-Cold War Era*, p. 93. Como nota aparte, Beatriz Rángel trabaja actualmente en New York y Miami con el Grupo Empresarial Cisneros, que es la corporación multinacional propiedad del magnate mediático Gustavo Cisneros, un cubano-venezolano que estuvo involucrado en el intento golpista de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Hasta mediados de 2004, Rángel también formaba parte de la junta directiva de Diálogo Interamericano, un comité asesor ubicado en Washington, D.C., que ha criticado duramente al gobierno venezolano

(9) La CTV sigue siendo uno de los beneficiarios principales de fondos de la NED en Venezuela, así como un instrumenta incuestionable de la política estadounidense, lo que se evidenció en el desempeño fundamental que el sindicato tuvo durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y la posterior huelga ilegal de la industria petrolera en el invierno de 2002-2003.

(10) El gobierno estadounidense no sólo utilizó a *La Prensa* como su único canal informativo; también facilitó fondos a través de la NED, la USAID y la USIA, la Agencia de Información de los Estados Unidos, para financiar a estaciones de radio y emisoras de televisión locales en Nicaragua.

(11) El gobierno de los Estados Unidos logró este objetivo mediante un compromiso de no financiar de manera encubierta a la oposición por medio de la CIA; sin embargo, poco tiempo después rompió esa promesa.

(12) Ver William Blum: *Killing Hope: U.S. Military and C.I.A. Interventions Since World War II*, Common Courage Press, 2004, pp. 163-172.

(13) Ver Eva Golinger "Media War Against the People" ("La Guerra Mediática contra el Pueblo"). [www.venezuelanalysis.com](http://www.venezuelanalysis.com)

(14) Ibid, anterior.

(15) Existen cientos de quejas entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su mayoría no tienen mérito. También se han entregado quejas contra el gobierno de Chávez alegando abusos de los derechos humanos a la Corte Criminal Internacional en La Haya y a la Corte del Distrito Sur en Miami, EEUU.

(16) Ver artículo de Linda Robinson en el *U.S. News and World Report*: "Terror Close to Home", de octubre de 2003. Robinson intenta relacionar a terroristas de Al Qaeda, FARC y ELN con el gobierno de Chávez.

(17) Cable desclasificado a solicitud nuestra sobre la base de la FOIA. Disponible en [www.venezuelafoia.info](http://www.venezuelafoia.info)

(18) El 13 de febrero de 2002 Carlos Ortega se reunió con Otto Reich en Washington, D.C.

(19) Ver David Corn: "Our Gang in Venezuela?". *The Nation*, 5 de agosto de 2002.

(20) Ver <http://www.venezuelafoia.info/NED/IRI/2001-047QR-Oct-Dec/pages/2001-047QR-Oct-Dec-04.htm> y <http://www.venezuelafoia.info/NED/ACLV/2003-545/pages/ACLV-metroRepre-01.htm>

(21) Cable de la Embajada de los Estados Unidos a Washington, 11-12 de abril de 2002. Disponible en [www.venezuelafoia.info](http://www.venezuelafoia.info)

(22) Tomado de la propia descripción de antecedentes de la OTI de la USAID en un

contrato entre USAID y *Development Alternatives, Inc.*, por diez millones de dólares para proyectos en Venezuela entre agosto de 2002 y agosto de 2004.

(23) Ibid.

(24) Ver "Building Confidence out of Discord in Venezuela" por Joel Jutkowitz, DAI News, [www.dai.com/dai\\_news/text\\_only/fall\\_confidence\\_in\\_venezuela\\_text\\_only.htm](http://www.dai.com/dai_news/text_only/fall_confidence_in_venezuela_text_only.htm)

(25) Concesión de la DAI, G-3822-101-008, disponible en [www.venezuela.foia.info](http://www.venezuela.foia.info). Nótese que USAID y DAI borraron los nombres de todos los destinatarios del financiamiento para el proyecto en Venezuela. Manifestaron que la razón era el "temor a la persecución" a los grupos que ellos financiaban, por parte del gobierno de Venezuela.

(26) Ver <http://www.colombia.indymedia.org/news/2004/05/12839.php>

(27) Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, 14 de agosto de 2002. Disponible en [www.venezuelafoia.info](http://www.venezuelafoia.info)

(28) <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/20021213.html>

(29) <http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2002/15976.htm>

(30) Departamento de Defensa. Cable disponible en [www.venezuelafoia.info](http://www.venezuelafoia.info)

(31) Resulta interesante que SAIC se había hecho cargo recientemente del desarrollo de los sistemas de seguridad y bases de datos de los mecanismos electrónicos de votación en el mercado de los Estados Unidos.

(32) Ver <http://www.venezuelafoia.info/USAID/USAID-index.htm> y <http://www.venezuelafoia.info/NED/SUMATE/SUMATE%20index.htm>

(33) [www.sumate.org](http://www.sumate.org)

(34) Informe del Departamento de la Defensa disponible en <http://www.venezuelafoia.info>

(35) Ver <http://www.venezuelafoia.info/NED/CIPE-CEDICE/CEDICE-index.htm>

(36) <http://www.venezuelafoia.info/NED/Memorandum/pages/Memorandum-D40.htm>

(37) El viernes, 20 de agosto de 2004, Roger Noriega, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, afirmó: "Hemos invertido una gran suma de dinero en los procesos democráticos porque tenemos fé en la sociedad civil, la cual constituye un pilar de la democracia representativa. Hemos dado dinero a diversas ONG en Venezuela por medio del Departamento de Estado y la USAID. Los grupos cívicos que tienen la misión de defender sus instituciones democráticas y de exigir derechos elementales para los venezolanos representan también una buena inversión."

(38) Ver <http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/news/archive/2004/08/19/international2018EDT0734.DTL&type=printable>, "US. Firm Embroiled in Venezuela's Referendum Controversy Defends its Exit Poll". *Associated Press*, 19 de agosto de 2004.

(39) « *La vía violenta permitirá sacarlo. Es la única que tenemos... (Chávez) debe morir como un perro, lo merece...* »